

REPÚBLICA DE COLOMBIA



RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICA
JUZGADO VEINTINUEVE DE FAMILIA DE BOGOTÁ

Bogotá, Dieciocho (18) de agosto de dos mil veintidós (2022)

REFERENCIA	ACCIÓN DE TUTELA
RADICACIÓN	Nº.2022-00466
ACCIONANTE	GILMA RINCÓN MEJÍA
ACCIONADO	LA ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES (COLPENSIONES) – VINCULADO: SEÑOR EDGAR DE JESÚS HERRERA CERPA

Procede el Despacho a resolver la acción de Tutela impetrada por la señora **GILMA RINCÓN MEJÍA**, en contra de **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES**.

BREVE DESCRIPCIÓN DEL CASO

La señora **GILMA RINCÓN MEJÍA**, por medio de apoderada judicial interpuso acción de tutela, por considerar vulnerados sus derechos a la seguridad social, igualdad, libre escogencia de régimen pensional y derecho de petición, con fundamento en los siguientes:

HECHOS:

Señala la señora **GILMA RINCÓN MEJÍA**, que radicó ante la **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES**, formulario de Afiliación al Sistema General de Pensiones como trabajadora dependiente debidamente diligenciado, con el fin de que su afiliación fuera aceptada en dicha Administradora.

Colpensiones mediante comunicación calendada el día 25 de febrero, bajo BZ. 2022_2505388-301477727, informa que la solicitud de vinculación inicial fue RECHAZADA, bajo la causal “personas excluidas del Sistema General de Pensiones, en razón a la edad”, la señora **GILMA RINCÓN MEJÍA** indica que nació el día 24 de diciembre de 1954, de lo que se concluye que para la fecha acredita 67 años de edad.

La Sra. **GILMA RINCÓN MEJÍA**, indica haber laborado para el Sr. **ÉDGAR DE JESÚS HERRERA CERPA**, como empleada del servicio doméstico, durante el periodo comprendido desde el 14 de septiembre de 1998 hasta el 28 de febrero de 2022 y por omisión involuntaria del mencionado señor, no afilió a la Sra. **GILMA RINCÓN MEJÍA** al Sistema de Seguridad Social en pensiones durante el periodo que ha durado la relación laboral.

Por lo anterior, y ante la negativa de Colpensiones en accepar la afiliación de la accionante como trabajadora dependiente al Sistema General de Pensiones, el día 24 de marzo, bajo BZ. 3804538, se radicó ante la Entidad solicitud de Cálculo Actuarial por omisión, con el fin de que Colpensiones procediera a liquidar el cálculo actuarial correspondiente del periodo comprendido desde el 14 de septiembre de 1998 hasta el 28 de febrero de 2022, periodo durante el cual la Sra. **GILMA RINCÓN MEJÍA**, laboró para el Sr. **ÉDGAR DE JESÚS HERRERA CERPA**, con la finalidad de que el Sr. **ÉDGAR DE JESÚS HERRERA CERPA**, procediera a cancelar los aportes dejados de cotizar al sistema de seguridad social en pensiones a favor de la Sra. **GILMA RINCÓN MEJÍA** y de esta forma se contabilicen las semanas para todos los efectos prestacionales a su favor.

REPÚBLICA DE COLOMBIA



RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICA
JUZGADO VEINTINUEVE DE FAMILIA DE BOGOTÁ

Colpensiones mediante oficio calendado el 24 de marzo bajo BZ. 2022_3804538-0802952, informa lo siguiente respecto de la solicitud de cálculo actuarial presentada:

Nos permitimos informarle que su solicitud radicada como se indica en la referencia, no ha sido aceptada.

Lo anterior por los siguientes motivos:

Motivos de rechazo
Respecto a la solicitud de calculo actuarial, se evidencia, que el ciudadano informado, a la fecha de esta solicitud no se encuentra afiliado a Colpensiones y/o presenta alguna inconsistencia en la afiliación, por lo cual no es procedente darle tramite.

Por lo que considera la accionante que la Administradora vulnera sus derechos fundamentales a la seguridad social, igualdad, equidad, libre escogencia de régimen pensional y derecho de petición, al negarse a aceptar su afiliación y por ende, liquidar el cálculo actuarial solicitado por su empleador

PRETENSIONES

Por lo tanto, acude la accionante al aparato judicial para que se le tutele sus derechos a la seguridad social, igualdad, libre escogencia de régimen pensional y derecho de petición y ordenar a LA ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES (COLPENSIONES), aceptar la afiliación al régimen de prima media con prestación definida y a que se estudie la solicitud de cálculo actuarial radicado bajo el número BZ. 2022_3804538 del 24 de marzo.

REGLAS DE COMPETENCIA

Este despacho es competente para conocer del asunto, de acuerdo con el artículo 86 de la Constitución Política y con los Decretos 2591 de 1991 y 306 de 1992, lo que indica que toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública e incluso de particulares.

La acción de tutela constituye un mecanismo encaminado a la protección efectiva de los derechos fundamentales de las personas, cuando estos resulten amenazados o vulnerados por cualquier autoridad pública e incluso en algunos casos por los particulares.

ADMISIÓN Y LITIS

*La presente acción de Tutela fue admitida mediante auto del día cinco (05) de julio de dos mil veintidós (2022), se ordenó vincular a la presente acción al señor **ÉDGAR DE JESÚS HERRERA CERPA** y notificar a las a las partes para que ejercieran su derecho de defensa y se resolvió mediante providencia de fecha 13 de julio de 2022, decisión de la cual la parte accionada solicito su nulidad.*

Surtido el trámite de nulidad mediante auto de fecha 8 de agosto de 2022, el Despacho declara la nulidad solicitada por la entidad demandada a partir de la sentencia emitida el 13 de julio de 2022.

CONSIDERACIONES

REPÚBLICA DE COLOMBIA



RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICA JUZGADO VEINTINUEVE DE FAMILIA DE BOGOTÁ

PROBLEMA JURÍDICO

Concierne al Juez constitucional determinar, si el accionar de la entidad accionada y del vinculado, vulneran los derechos fundamentales de la accionante.

La acción de Tutela constituye un logro alcanzado por la colectividad con ocasión de la expedición de la Constitución Política de 1991, para frenar los desafueros de las autoridades públicas, cuando quiera que con hechos u omisiones comprometan los derechos fundamentales de los ciudadanos.

La finalidad de esa acción es lograr que, a falta de vía judicial ordinaria, mediante un trámite preferente y sumario, el juez ante quien se acuda dé una orden de actuar o abstenerse de hacerlo, tendiente a hacer cesar la vulneración o amenaza de violación denunciada.

El artículo 86 de nuestra Carta Magna así lo consagró. También advirtió su procedencia contra particulares encargados de la prestación de servicios públicos o cuya conducta afecte grave y directamente el interés colectivo, o respecto de quienes el solicitante se halle en estado de indefensión o subordinación.

El caso en concreto.

Así las cosas, procede esta Juez Constitucional al estudio en sede de tutela, indicando que la aquí peticionaria invoca como derechos conculcados el de seguridad social, igualdad, equidad, libre escogencia de régimen pensional y derecho de petición

*La entidad accionada **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES (COLPENSIONES)**, indico: “...de acuerdo con el artículo 6º del Decreto 2591 de 1991 la acción de tutela es un mecanismo subsidiario y residual por lo que será improcedente cuando existan otros recursos o medios de defensa judicial, razón por la cual, en concordancia con el numeral 4º del artículo 2º del Código Procesal del Trabajo, toda controversia que se presente en el marco del Sistema de Seguridad Social entre afiliados, beneficiarios o usuarios, empleadores y entidades administradoras deberá ser conocida por la jurisdicción ordinaria laboral.*

Sobre el particular, el artículo 2 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social es diáfano en señalar que la jurisdicción ordinaria, en sus especialidades laboral y seguridad social, conocerá de “las controversias referentes al sistema de seguridad social integral, que se susciten entre los afiliados, beneficiarios o usuarios, los empleadores y las entidades administradoras o prestadoras, cualquiera que sea la naturaleza de la relación jurídica y de los actos jurídicos que se controviertan”. Ahora bien, en relación al caso objeto de estudio, el ciudadano debe agotar los procedimientos administrativos y judiciales dispuestos para tal fin y no discutir la acción u omisión de Colpensiones vía acción de tutela, ya que ésta solamente procede ante la inexistencia de otro mecanismo judicial... Ahora bien, con relación a la edad del accionante como factor relevante para conceder el amparo deprecado mediante la acción de tutela y obtener así el pago de una prestación pensional, la Corte Constitucional fue enfática en la sentencia T-391 de 2013, al determinar lo siguiente: “(...) la condición de sujeto de la tercera edad no constituye per se razón suficiente para admitir la procedencia de la acción de tutela. En efecto, reiterando lo expuesto por la Corte en distintos

REPÚBLICA DE COLOMBIA



RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO JUZGADO VEINTINUEVE DE FAMILIA DE BOGOTÁ

pronunciamientos sobre la materia, para que el mecanismo de amparo constitucional pueda desplazar la labor del juez ordinario o contencioso, según se trate, es también necesario acreditar, por una parte, la ocurrencia de un perjuicio irremediable derivado de la amenaza, vulneración o afectación de derechos fundamentales como la vida digna, el mínimo vital y la salud; y, por otra, que someterla a la rigurosidad de un proceso judicial común puede resultar aún más gravoso o lesivo de sus derechos fundamentales” y respecto al cálculo actuarial indica “La convalidación de semanas cuando no existe relación laboral se debe realizar por medio de cálculo actuarial, para de esta manera asegurar el aprovisionamiento de recursos económicos necesarios para actualizar la historia laboral del afiliado sin menoscabar los recursos del Estado. Así, el cálculo actuarial se constituye como un mecanismo que permite al empleador negligente, reparar el daño ocasionado por la omisión de afiliación y cotización efectiva de los aportes a pensión de sus trabajadores. Aun con todo lo anterior, Colpensiones NO está obligada al cobro de aportes en pensiones cuando el empleador omite la afiliación de sus trabajadores, pues es claro que la afiliación de un trabajador es el mecanismo mediante el cual Colpensiones o cualquier AFP tiene conocimiento de que existe una relación laboral que origina la obligación de pagar aportes en seguridad social, en casos como el presente, en donde no existe afiliación, esta Administradora no puede ejercer ninguna labor de cobro, toda vez que no tiene noticia de la existencia del vínculo laboral del trabajador. Si bien manifestó la Corte Constitucional en la sentencia T 079 de 2016, que los efectos del pago extemporáneo de cotizaciones no se pueden trasladar a los afiliados, y la mora del empleador en el pago de los aportes no puede justificar retrasos ni inconsistencias en el trámite de reconocimientos pensionales, es preciso señalar que dicha directriz únicamente es aplicable cuando existe afiliación, dado que como fue señalado, es precisamente a partir de la afiliación que Colpensiones tiene noticia de la existencia del vínculo laboral, requisito esencial para desplegar las acciones de cobro que han sido atribuidas a las AFP por el legislador....”

Por su parte el vinculado señor **ÉDGAR DE JESÚS HERRERA CERPA**, indica “Desde el 14 de septiembre de 1998 y hasta la fecha, la Sra. **GILMA RINCÓN MEJÍA**, ha laborado como empleada del servicio doméstico, devengando el salario mínimo legal mensual vigente, sin embargo, por una omisión involuntaria, omití realizar los aportes a seguridad social a los que ella tiene derecho por la relación laboral que sostenemos. Es por ello, que se solicitó a Colpensiones su afiliación como trabajadora dependiente, tal y como se narra en los hechos de la tutela”.

En el caso de marras, solicita la accionante se le ordene a la entidad accionada **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES (COLPENSIONES)**, aceptar la afiliación al régimen de prima media con prestación definida de la señora **GILMA RINCÓN MEJÍA** y a que se estudie la solicitud de cálculo actuarial.

Para resolver el presente asunto este despacho estudiará en primer lugar la procedencia de la misma, encontrando que la parte accionada indicó que la misma es improcedente toda vez que se deben agotar los procedimientos administrativos y judiciales dispuestos para tal fin y que su condición de sujeto de tercera edad no constituye en razón suficiente para admitir la procedencia de la acción de tutela; sin embargo, respecto al tema encuentra el Despacho que la H. Corte Constitucional en sentencia T-064-18 preciso:

“...la acción de tutela es procedente para proteger los derechos fundamentales, y en particular los derivados del reconocimiento y pago de las prestaciones sociales, en los

REPÚBLICA DE COLOMBIA



RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICA JUZGADO VEINTINUEVE DE FAMILIA DE BOGOTÁ

siguientes casos. (i) Cuando no existe otro medio de defensa judicial, o cuando existiendo, el mismo no resulta idóneo para resolver el caso concreto, eventos en los que la tutela procede como mecanismo principal de defensa ante la imposibilidad material de solicitar una protección real y cierta por otra vía. Y (ii) cuando ésta se promueve como mecanismo transitorio, debiendo acreditar el demandante que el amparo constitucional es necesario para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable, en cuyo caso la orden de protección tendrá efectos temporales, sólo hasta el momento en que la autoridad judicial competente decida en forma definitiva el conflicto planteado”^{170...1}.

...(vi) Además, cuando la acción de tutela es promovida por personas que requieren especial protección constitucional, como los niños y niñas, mujeres cabeza de familia, personas en condición de discapacidad, **personas de la tercera edad**, entre otros”¹⁷¹.

Así mismo en sentencia T-337/18 la H. Corte constitucional indico: “...la línea jurisprudencial que ha trazado la Corte a través de los años ha sido consistente en la idea de que las personas de la tercera edad merecen especial protección constitucional debido a la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran. Empero, han sido diversos los criterios adoptados por las diferentes Salas de Revisión de esta Corporación, a efectos de establecer desde qué edad inicia dicha protección y como consecuencia de ello, la flexibilización del estudio de procedibilidad de la acción de tutela, tal como se describe a continuación de manera breve.

Un primer momento lo constituye la jurisprudencia que reconoció que la tercera edad debía iniciar entre los 70 y 71 años; así, la Sentencia T-456 de 1994 dispuso que una vez la persona hubiese superado el promedio de vida establecido para los colombianos (para entonces en 71 años), y considera que ha obtenido trato discriminatorio en el reajuste pensional y por tal motivo ha reclamado ante juez competente, pero se estima razonablemente que el solicitante ya no existiría para el momento que se produjera la decisión judicial, debido a su edad y a la congestión judicial; esa persona no tiene otro medio distinto al de la tutela para que, provisionalmente, mientras se decide el fondo del asunto por el juez natural, se ordene el respeto a su derecho[89].

Un segundo momento se da a partir de la sentencia T-463 de 2003, que reconoció que la edad considerada por la jurisprudencia como límite mínimo de la tercera edad es de 71 años, haciendo la salvedad de que tal monto podría reducirse, y dejando claro que el concepto de tercera edad puede no resultar lo suficientemente objetivo, pues la especial protección constitucional deviene de las circunstancias de cada caso en particular y no solo del factor etario. A la par, la decisión T-425 de 2004, retomó el criterio establecido en la T-456 de 1994 ya citada, para reiterar que la importancia de establecer a partir de cuándo inicia la tercera edad radica en el tratamiento especial y preferencial que deben recibir tales personas.

Un tercer momento parte de la sentencia T-138 de 2010, en la que se buscó establecer un criterio objetivo, alejado de la mera voluntad del juzgador para, a partir del mismo, presumir la calidad de persona de la tercera edad de un determinado accionante, de modo que se indicó que el criterio para considerar a alguien de la tercera edad, es que tenga una edad superior a la expectativa de vida oficialmente reconocida en Colombia, criterio objetivo que fue concebido a modo de presunción, es decir, que admite prueba en contrario, lo que implica que no constituye la única vía para concretar la protección ni que por el simple hecho de cumplir con la edad requerida pudiera obtener lo que quisiera mediante la acción de tutela.

Un cuarto momento fue introducido con la decisión T-457 de 2012, con fundamento en la Ley 1276 de 2009 “a través de la cual se modifica la Ley 687 del 15 de agosto de 2001 y se establecen nuevos criterios de atención integral del adulto mayor en los centros vida”, en cuyo artículo 7º se consagra que adulto mayor es la persona que cuenta con sesenta (60) años de edad o más, agregando que a criterio de los especialistas de los centros vida,

REPÚBLICA DE COLOMBIA



RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO JUZGADO VEINTINUEVE DE FAMILIA DE BOGOTÁ

una persona podrá ser clasificada dentro de este rango, siendo menor de 60 años y mayor de 55, cuando sus condiciones de desgaste físico, vital y psicológico así lo comprueben.

Un quinto momento, lo constituye la sentencia T- 339 de 2017, en el que la Corte, al abordar nuevamente el concepto de tercera edad, estableció que aunque tal noción encierra un asunto sociocultural, la Corte ha distinguido este concepto del de “vejez”, por lo que el conjunto de adultos mayores no es homogéneo. De esta manera, por razón de la edad, mínima en unos casos y avanzada en otros, se pueden encontrar situaciones disímiles que ameritan un trato diferencial, para hacer efectivos los derechos fundamentales en el marco del orden constitucional vigente, pues no es lo mismo ser un adulto mayor de 60 años, en edad de jubilación, que ser una persona de 80, cuyas limitaciones funcionales empiezan a hacerse cada vez más notorias.

A partir del concepto de adulto mayor definido en la Ley 1276, en el que el Legislador apeló a la noción de “vejez” propia del sistema de seguridad social en pensiones, entre los adultos mayores, solo algunos son considerados personas de la tercera edad, lo que le ha permitido a la jurisprudencia constitucional con fundamento en el principio de igualdad, prever distintos efectos jurídicos relacionados con una u otra categoría. Por ejemplo, ante las solicitudes de prestaciones pensionales mediante acción de tutela, en principio, el adulto mayor cuenta con un medio ordinario idóneo, cual es el proceso ante la jurisdicción laboral. Sin embargo, a la tercera edad no puede exigírsele el agotamiento de este mecanismo judicial ordinario. (Resaltado con negrilla por el Juzgado)

En el caso concreto, la accionante cuenta en este momento con sesenta y siete (67) años de edad, pues nació el 24 de mayo de 1954, tal como da cuenta la copia de la cédula de ciudadanía obrante en el expediente y que con el paso del tiempo evidentemente ha sufrido un desgaste natural en sus condiciones físicas encontrándose en consecuencia en una debilidad manifiesta, pues someterla a los rigores de un proceso judicial resultaría desproporcionado y lesivo de sus derechos.

*Este Despacho procederá a resolver el presente asunto, el cual versa sobre la inscripción y pago de la seguridad social de la accionante, por omisión de su empleador y la respectiva inscripción al régimen de prima media con prestación definida ante la **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES (COLPENSIONES)** y su correspondiente estudio del cálculo actuarial.*

Respecto al tema la Corte Constitucional en sentencia T-064-18, preciso: “...se considera que el empleador al no afiliar o incumplir con el pago de las respectivas cotizaciones desconoce su obligación legal y reglamentaria, al igual que vulnera el derecho fundamental a la seguridad social del trabajador, el cual no puede verse afectado por una obligación que incumple quien lo contrata, máxime cuando las Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías, conforme con lo dispuesto antes en el Acuerdo 049 de 1990 y luego en la Ley 100 de 1993, pueden iniciar el cobro ejecutivo por los incumplimientos legales en los que incurran los empleadores, como por ejemplo ante la omisión en la afiliación y/o la omisión en el pago de aportes a la seguridad social de sus trabajadores, lo cual está regulado como una obligación general de los empleadores.

En efecto, el articulado de la Ley 100 de 1993 que faculta a estas entidades a realizar los cobros indica explícitamente que podrá ser activada cuando el empleador incumpla las obligaciones (en general) contempladas en la reglamentación que expida el gobierno y no solo para omisión en el pago de las cotizaciones.

Por lo tanto, la omisión en la afiliación y la falta de pago de las cotizaciones, como el incumplimiento a todas las obligaciones contempladas en la legislación, por parte del empleador no puede ser imputable al trabajador, ni puede generar consecuencias negativas poniendo en peligro el derecho a la vida digna, al mínimo vital, a la salud y a la seguridad social, máxime cuando tal aspecto no le puede ser imputable....

...7. Incumplimiento del deber de afiliación

REPÚBLICA DE COLOMBIA



RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICA JUZGADO VEINTINUEVE DE FAMILIA DE BOGOTÁ

Sobre el incumplimiento del deber de afiliación la Corte Suprema de Justicia, Sala Laboral, como tribunal de casación que unifica la jurisprudencia en materia laboral ha sostenido respecto de la obligación del empleador de afiliar a sus trabajadores, que:

La afiliación de los trabajadores particulares al ente de seguridad social recurrente constituye una obligación laboral que precede a la vigencia de la Ley 100 de 1993, es decir, que no fue a partir de ésta que se estableció tal obligación patronal como un imperativo en las relaciones del trabajo subordinadas particulares, sino que de tiempo atrás, específicamente desde la de la Ley 90 de 1946, cuando se concibió por el legislador la existencia de dicho ente de seguridad social, se proyectó la necesidad de que los trabajadores particulares estuvieran cubiertos ante las contingencias de invalidez, vejez y muerte por un mecanismo protector de carácter económico como lo vinieron a ser las pensiones de invalidez, vejez y sobrevivientes”[79].

Por su parte, el inciso primero del numeral 1° del artículo 15 de la Ley 100 de 1993 —este último modificado por el artículo 3 de la Ley 797 de 2003— dispone que: “[s]erán afiliados al Sistema General de Pensiones: 1. En forma obligatoria: Todas aquellas personas vinculadas mediante contrato de trabajo o como servidores públicos. Así mismo, las personas naturales que presten directamente servicios al Estado o a las entidades o empresas del sector privado, bajo la modalidad de contratos de prestación de servicios, o cualquier otra modalidad de servicios que adopten, los trabajadores independientes y los grupos de población que por sus características o condiciones socioeconómicas sean elegidos para ser beneficiarios de subsidios a través del Fondo de Solidaridad Pensional, de acuerdo con las disponibilidades presupuestales”. (Negrilla fuera de texto).

A su vez, el artículo 22 de la misma ley impone al empleador la obligación de descontar del salario el aporte a la seguridad social y aún si el contratante no descuenta lo pertinente a la pensión este deberá cubrir la totalidad de la contribución.

De acuerdo con lo señalado anteriormente, y lo explicado en el acápite 5° de esta providencia puede sostenerse que la legislación social, desde el inicio de su implementación ha puesto en cabeza del empleador responsabilidades, con el fin de garantizar al trabajador que estas contribuciones sean reales y efectivas, pues el cumplimiento de los deberes de afiliar y de efectuar las cotizaciones es determinante para poder acceder al reconocimiento y pago de la pensión, al momento de cumplir la edad requerida.

Ahora bien, en lo que respecta a la omisión en la afiliación por parte del patrono y su tratamiento judicial frente a la solicitud del reconocimiento y pago de la pensión por parte de la trabajadora, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, ha estudiado casos considerando que:

*“(…) que en desarrollo de reglas tales como las establecidas en los literales c) y d) del artículo 33 de la Ley 100 de 1993, modificado por el 9.º de la Ley 797 de 2003, y de principios de la seguridad social como los de universalidad, integralidad, unidad y eficiencia, **todas las hipótesis de omisión en la afiliación, sea cual sea la razón a la que obedezcan, deben encontrar una solución común, que consiste en que las entidades de seguridad social tengan en cuenta el tiempo servido, como tiempo efectivamente cotizado**, con la obligación correlativa del empleador de pagar el título pensional que corresponda, por los tiempos omitidos, tal y como lo dedujo el Tribunal.”[80] (Negrilla fuera de texto).*

Igualmente, en la Sentencia del 31 de enero de 2018 (SL14388-2015), la Corte Suprema de Justicia –Sala Laboral– señaló:

*“(…) la jurisprudencia de la Sala ha evolucionado hasta encontrar una suerte de solución común a las hipótesis de «omisión en la afiliación» al sistema de pensiones, guiada por las disposiciones y principios del sistema de seguridad social, **que no se aleja diametralmente de la que se sostiene frente a situaciones de «mora» en el pago de los aportes, pues, en este caso, se mantiene la misma línea de principio de que las entidades de seguridad social siguen a cargo del reconocimiento de las prestaciones** (…).*

(…)De igual forma, para la Corte, esta orientación es la respuesta más adecuada a los intereses de los afiliados, pues se les garantiza el pago de sus prestaciones a través de entidades del sistema de seguridad social, que tienen una mayor solidez financiera, vocación de permanencia y estabilidad, a la vez que una menor volatilidad que la que pueden tener determinadas empresas.

REPÚBLICA DE COLOMBIA



RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO JUZGADO VEINTINUEVE DE FAMILIA DE BOGOTÁ

Dicho ello, la Sala reitera que, ante hipótesis de omisión en la afiliación del trabajador al sistema de pensiones, es deber de las entidades de seguridad social tener en cuenta el tiempo servido, como tiempo efectivamente cotizado, y obligación del empleador pagar un cálculo actuarial, por los tiempos omitidos, a satisfacción de la respectiva entidad de seguridad social. (Negrilla fuera de texto)...

*Teniendo en cuenta el material probatorio, y la jurisprudencia antes citada este despacho Constitucional observa que el mismo señor **ÉDGAR DE JESÚS HERRERA CERPA**, aceptó la relación laboral y haber omitido realizar los aportes a seguridad social de la señora **GILMA RINCÓN MEJÍA** dentro del periodo comprendido desde el 14 de septiembre de 1998 hasta el 28 de febrero de 2022, por lo que al encontrarse probada la relación laboral entre la accionante y el vinculado señor **ÉDGAR DE JESÚS HERRERA CERPA**, este Despacho advierte que según lo indicado por la H. Corte Constitucional, la **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES**, se encuentra vulnerando los derechos seguridad social, igualdad, equidad, libre escogencia de régimen pensional y derecho de petición de la accionante señora **GILMA RINCÓN MEJÍA**.*

*En consecuencia de lo anterior, este despacho, ordenará a la entidad accionada **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES-COLPENSIONES y SU REPRESENTANTE LEGAL Y/O QUIEN HAGA SUS VECES**, que el término de cuarenta y ocho (48) horas, inicie los trámites para aceptar la afiliación al régimen de prima media con prestación definida de la accionante y se estudie la solicitud de cálculo actuarial, del periodo transcurrido entre el 14 de septiembre de 1998 hasta el 28 de febrero de 2022 tomando como salario base la suma equivalente al SMLMV indicada por el vinculado señor **ÉDGAR DE JESÚS HERRERA CERPA**, en su contestación y una vez realizado el correspondiente cálculo actuarial por parte de la **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES- COLPENSIONES**, el vinculado señor **ÉDGAR DE JESÚS HERRERA CERPA** deberá cancelar la suma de dinero liquidada, por parte de dicha entidad pensional, con ocasión de la omisión de afiliación causada desde el 14 de septiembre de 1998 hasta el 28 de febrero de 2022.*

POR MÉRITO DE TODAS LAS CONSIDERACIONES PLASMADAS EN LA PARTE MOTIVA DE ESTE PROVEÍDO, ESTE JUZGADO ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LA LEY,

RESUELVE

PRIMERO: TUTELAR los derechos fundamentales de seguridad social, igualdad, equidad, libre escogencia de régimen pensional de la accionante señora **GILMA RINCÓN MEJÍA**, en contra de la entidad accionada **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES- COLPENSIONES**, que le asiste a la señora **GILMA RINCÓN MEJÍA**, identificada con C.C. No 46.375.140 de conformidad con la parte considerativa del presente fallo.

SEGUNDO: ORDENAR a la entidad accionada **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES-y SU REPRESENTANTE LEGAL Y/O QUIEN HAGA SUS VECES**, para que en el término de cuarenta y ocho (48) horas inicie los trámites para aceptar la afiliación al régimen de prima media con prestación definida de la accionante y se estudie la solicitud de cálculo actuarial del periodo transcurrido entre el 14 de septiembre de 1998 hasta el 28 de febrero

REPÚBLICA DE COLOMBIA



RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICA
JUZGADO VEINTINUEVE DE FAMILIA DE BOGOTÁ

de 2022, tomando como salario base la suma equivalente al SMLMV indicada por el vinculado señor **ÉDGAR DE JESÚS HERRERA CERPA**, en su contestación.

TERCERO: ORDENAR al señor **ÉDGAR DE JESÚS HERRERA CERPA** que una vez realizado el correspondiente cálculo actuarial por parte de la **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES- COLPENSIONES** y que corresponde a la omisión de afiliación de la señora **GILMA RINCÓN MEJÍA**, causada desde el 14 de septiembre de 1998 hasta el 28 de febrero de 2022., realice el correspondiente pago a la mencionada entidad.

CUARTO: NOTIFÍQUESE de esta decisión a las partes involucradas por el medio más expedito.

QUINTO: De no ser impugnada, remítase la actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión

COPÍESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

SANDRA MEJÍA MEJÍA
Juez

JUZGADO VEINTINUEVE DE FAMILIA DE
BOGOTÁ D.C.

El anterior fallo se notificó por estado No. 56

Hoy 19 de agosto de 2022

CAROLINA SANTAMARÍA LUNA
Secretaria

Firmado Por:

Sandra Mejía Mejía

Juez Circuito

Juzgado De Circuito

Familia 29 Oral

Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: 72f0b0686d0548c722bc7afec861c693cdcd5516809b718eaa8862b876d3d11f

Documento generado en 18/08/2022 07:56:43 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:

<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>